

Procesos emancipatorios de los adolescentes y jóvenes utilizados por las mafias, enfrentando la violencia urbana en Bogotá y Medellín (Colombia)

*Cristiano Morsolin**

Introducción

El crecimiento de la violencia urbana y la inseguridad ciudadana es un fenómeno social de gran trascendencia que está afectando la vida de las personas a nivel mundial. No obstante, los niveles en que se expresa este fenómeno no son homogéneos. Ello ha generado un extenso debate alrededor de este complejo tema, que busca dictaminar las causas y posibles consecuencias de las múltiples violencias que aquejan nuestras sociedades. De igual manera se ha considerado necesaria la construcción de redes sociales e institucionales que aporten y refresquen conocimientos desde distintos lugares, perspectivas y enfoques para un mejor entendimiento de la naturaleza del fenómeno.

Este artículo investiga los casos específicos de las ciudades de Medellín y de Bogotá (Colombia) en la lucha en contra de la violencia urbana y para la participación ciudadana de adolescentes y jóvenes utilizados por las mafias. E intenta responder preguntas relacionadas con las experiencias de participación ciudadana, de educación a la legalidad, de resistencia no violenta en contra de las mafias exploradas tales como: ¿En qué contextos específicos de confrontación violenta y de dominio de los actores mafiosos surgen? ¿Cuáles son sus modalidades de acción y que repertorios de acciones concretas han desarrollado en la sociedad civil dependiendo de estos contextos? ¿Cómo las políticas públicas pueden enfrentar los efectos devastadores de esta violencia en los adolescentes y jóvenes utilizados por las mafias, en la convivencia, en el proyecto “civilizatorio” y el Estado de Derecho?

* Investigador italiano radicado na América Latina desde 2001. Especializado em projetos de educação de rua para adolescentes e jovens utilizados pelas máfias em Palermo e na Calábria (Itália). Tem trabalhado em projetos de cooperação internacional para a defesa dos direitos dos meninos, meninas e adolescentes na Colômbia, Perú, Equador e Brasil. Autor de vários livros e palestrante internacional, analisa os processos emancipatórios dos movimentos sociais. Seu trabalho na Colômbia foi mencionado pela Relatora Especial das Nações Unidas para a proteção dos defensores dos direitos humanos, Hina Jilani. Atualmente é representante legal da fundación Escuela Viajera de Bogotá. Uma versão deste artigo foi apresentada no IV Congresso Internacional de Pedagogia Social, Campinas/São Paulo. E-mail: morsolin2006@yahoo.com

Referentes conceptuales

Este artículo analiza el *target* específico de adolescentes y jóvenes utilizados por las mafias y por la violencia armada organizada. Se les puede definir como aquellos jóvenes empleados (o que participan de algún modo) en organizaciones donde se emplea la violencia armada, hay elementos de un mando estructurado y se ejerce poder y control

sobre un territorio, la población local y sus recursos. Este grupo de personas recibe la denominación de COAV (por sus siglas en inglés: *Children and Youth in Organized Armed Violence*). Tomando la definición más aceptada académicamente sobre lo que constituye un conflicto de alta intensidad o guerra- la definición formulada por el Departamento de Investigación de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala (Suecia)¹ – se puede afirmar que Colombia es un país en guerra.

Fernando Carrión Mena, Coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad, Flacso Ecuador, comenta que

el fenómeno moderno de las pandillas puede encontrarse a principio del siglo XIX, en esa mezcla de los guetos construidos por la segregación territorial y la marginación social, en el ámbito de la juventud urbana. La crisis de las instituciones de socialización como la familia, la escuela, el trabajo y el espacio público; la inadecuación de los modelos de consumo que los medios de comunicación construyen y que el mercado desarrolla; la reducción de oportunidades para los jóvenes; la necesidad de construir mecanismos de autodefensa y protección; las migraciones internacionales y las políticas de seguridad ciudadana, entre otras, son razones por su existencia (CARRIÓN MENA, entrevista personal al autor, 30/03/2012, s/p).

Umberto Santino (1995, p. 129), director del Centro “Impastato” de Palermo (Italia), entre los máximos expertos antimafia a nivel mundial, considera que

la mafia es un conjunto de organizaciones sociales que actúan adentro de un articulado contexto relacional, configurando un sistema de violencia y de ilegalidad que tiene el objetivo de la acumulación de capital y de la gestión de poderes, que se basa en un código cultural y goza de un consenso social.

Boaventura de Sousa Santos interpreta el dominio de los procesos estructurales de desigualdad y exclusión como la crisis del contrato social de la modernidad y el fracaso rotundo de las promesas modernas de igualdad, libertad, solidaridad. El resultado de este acontecimiento es la emergencia de un nuevo régimen social que él llama “fascismo social”: “vivimos en sociedades que son políticamente democráticas pero socialmente fascistas” (BOAVENTURA SANTOS, 2005, p. 14). Con esta categoría de análisis se refiere a todo un conjunto de prácticas sociales excluyentes,

violentas y autoritarias que configuran nuevas formas de sociabilidad y condicionan negativamente millones de personas en el mundo.

Experiencias de resistencia civil no armadas se han conocidos en muchos países del mundo. El concepto clave aquí es el de resistencia. A partir de él pueden interpretarse y dotar de sentido las múltiples y variadas experiencias y estrategias colectivas de las comunidades locales al rebelarse contra los poderes de facto y autoritarios de los actores armados y mafiosos, así como aquellas dirigidas a afrontar la dramática situación de exclusión social. La resistencia corresponde a cualquier expresión colectiva de oposición o confrontación frente a estrategias de dominación o a situaciones de injusticias percibidas como tales por grupos o actores colectivos. La resistencia es la contrapartida del poder (NIETO LÓPEZ, 2009, p. 41).

El surgimiento de nuevos sujetos populares y subjetividades urbanas, así como la diversificación del asociacionismo y de las luchas urbanas de Latinoamérica plantea a la investigación social nuevos retos interpretativos en cuanto al carácter histórico, al alcance político y la dimensión cultural de estas nuevas luchas y los movimientos sociales (TORRES, 2007, p. 42).

Una llave de lectura es el posicionamiento conceptual de la emancipación como el proceso de adquisición de grados de autonomía que dura toda la vida. De acuerdo a Colomer y Lleida (2009, p. 34), “es la adquisición de la capacidad da autodeterminación o decisión sobre la evolución de la propia vida. Es decir, emanciparse como ciudadano/a, significaría decidir plenamente y con autonomía e independencia la propia trayectoria vital”.

Contextualización

La guerra urbana que se libra en Medellín y en la que se enfrentan miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, hacen de esta ciudad un territorio en disputa permanente. En Medellín, como en otras ciudades latinoamericanas, el fenómeno de la violencia estuvo asociado a dinámicas de desplazamiento forzado y de cinturones de miseria donde no existió una consistente presencia estatal y se dieron zonas de ilegalidad y de profundo control mafioso. En estos escenarios llegaron bandas criminales a reclutar jóvenes, ante una demanda creciente del narcotráfico por hombres armados, pero también se establecieron redes mafiosas que impusieron sus leyes y su orden. El narcotráfico desde los carteles hasta los paramilitares y pasando por la

guerrilla, han sumergido a los barrios populares por temporadas de la mal llamada “limpieza social”. Esta práctica mafiosa no es más que la lucha por el monopolio de la criminalidad, la violencia y la agresividad, donde se cuentan en las víctimas jóvenes desde ladrones hasta consumidores de droga que son visibles en las barriadas populares.

Mientras la tasa mundial de homicidios por cada 100 mil habitantes (hpcmh) esta en 8, la de Latinoamérica está en 26, la de Colombia en 40 y la de Medellín en 94. Ocupa la cuarta posición mundial de ciudades más violentas, y es la primera del país. La tasa actual no es tan alta como en 1991 cuando fue de 381 hpcmh, pero tampoco tan baja como en el 2007, cuando se registraron 34 (CORRALES, 2010, s/p).⁵

El portavoz de la Alcaldía de Medellín Jairo Herrán en 2010 subraya que se "ha documentado más de 400 agrupaciones ilegales y de ellas unas 200 están activas, con un total de 5.000 miembros", dijo Herrán. Se trata de bandas "conformadas por paramilitares que no se desmovilizaron, por ex paramilitares que entraron a programas de reinserción del Gobierno, por nuevos delincuentes y muchachos reclutados", un drama en el que el narcotráfico siempre está detrás. La droga "arroja utilidades económicas muy importantes que sirven de imán a los jóvenes", manifestó el portavoz, al destacar que "hay cierta continuidad con el pasado" y referirse a las grandes guerras que se libraban hace 20 años, durante el apogeo del Cártel de Medellín, liderado entonces por el capo Pablo Escobar y cuando esta ciudad era la más violenta de América. "La situación es compleja, es un proceso histórico que viene de años atrás, que ha sufrido mutaciones y que ha dado como resultado lo que tenemos hoy día", se lamentó Herrán (EL MUNDO, Colômbia, caderno America, 29/08/2010).

La sociedad - señala el ex alcalde de Medellín (hasta diciembre 2011) Alonso Salazar, sociólogo autor de “Nacimos para semillas”, debe hacer conciencia de que la seguridad no es un problema ideológico, sino un derecho ciudadano. “Cuando una sociedad comienza a masificar el delito, inicia una ruptura profunda, se convierte en una bola de nieve: un policía corrupto justifica acciones ilegales, la policía viola derechos humanos, los jueces se corrompen, es un circuito muy preocupante”, alerta. En el caso de Medellín, considera, el factor determinante para que se generara un proceso de violencia ligada al narcotráfico fue la carencia de oportunidades laborales y de desarrollo en diversos sectores. “Eso conduce a que esas personas vean en el narcotráfico una posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y los narcos construyeron ahí sus ejércitos de distribuidores de droga. Luego vino el empoderamiento de esos grupos en pequeños sectores territoriales”, recuerda. Sostiene,

sin embargo, que hay que priorizar la agenda social en el combate a la delincuencia. Subraya, no obstante, que jamás se puede "justificar socialmente la violencia" (SALAZAR, 2009, entrevista pessoal ao autor em 25/11/2009, s/p).

En términos similares se expresó Elkin Pérez, director de Con-Vivamos, una organización nacida en los años 90 a iniciativa de los vecinos. Pérez señaló que "los jóvenes son las principales víctimas" porque son reclutados por los grupos ilegales pero también por el Estado a través de un programa con la Policía Cívica para mayores de 18 años. Con-Vivamos expresó asimismo su preocupación porque "niños, de diez años en adelante, sean vinculados al conflicto, como víctimas y como victimarios". En palabras de Pérez, el narcotráfico es el "gran elemento de la violencia", que se desató cuando extraditaron a los grandes capos, quienes "imponían el orden social, económico y político" en las comunas. Con la guerra entre "Valenciano", "Sebastián" y "Los Gaitanistas", los nuevos señores de la guerra, se ha activado el conflicto, confesaron los propios habitantes. Éstos se disputan "un poder territorial que pasa por la vacuna al transporte (impuesto ilegal), al comercio y hasta a los mismos habitantes para garantizarles la seguridad", según el director de Con-Vivamos. En Medellín, "hay 52 lugares de confrontación" y la Policía se alía a uno de los bandos, lo que produce "connivencia y corrupción, ya que la propia Policía entrega armas y ayuda en esa lucha", matizó. "Ese panorama genera un caos a nivel de justicia y organización, una conflictividad permanente alimentada por la pobreza, hacinamiento, problemas de salud, educación y desempleo", insistió Pérez al diario El Mundo (EL MUNDO, Colombia, caderno America, 29/08/2010).

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha difundido datos muy alarmantes en septiembre de 2011. La situación de los niños de la ciudad es alarmante, según un reciente informe del Comité Distrital de Derechos Humanos, presidido por Lilia Solano. El aumento del pandillismo, el avance de las redes de micro tráfico dentro de los planteles educativos, la prostitución infantil, la violencia intrafamiliar y la falta de cupos en las escuelas del Distrito conforman un dramático menú de amenazas, en momentos en que la ciudad entera registra horrorizada una oleada de casos de violencia en contra de los niños. El informe deja entrever que son las localidades de Bosa, Santa Fe, Kennedy y Ciudad Bolívar las más críticas. En Bosa, las pandillas están aumentando el reclutamiento de jóvenes, que no sólo participan en actos delictivos, sino que son presa de las redes de distribución de droga que controlan estos grupos. La captura de los colegios por parte de las redes de micro tráfico, parece ser el fenómeno más extendido y alarmante del

reporte. En Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy, las pequeñas mafias que controlan la distribución de la droga están afinando sus estrategias de captura de los colegios, con el consecuente incremento de la violencia y el consumo de droga en los planteles. El informe añade:

El negocio del micro tráfico no sólo involucra droga, sino armas, sexo y trata de personas. Los maestros son testigos de hechos aterradores como el uso de estudiantes como mulas, niñas y niños “prepagos” utilizadas por el mercado del sexo, o niños usuarios de armas que son rentadas para las peleas dentro y fuera de los colegios”. En el caso de Ciudad Bolívar, el negocio estaría controlado por antiguos miembros de células guerrilleras y paramilitares, que fueron desmanteladas (MALDONADO, 2011, s/p).

El representante a la Cámara, Ángel Custodio Cabrera en 2008 ha denunciado que Bogotá tiene la asombrosa cifra de 1.319 pandillas, con 18.700 miembros. En el 2005 era de 803 y en 2003 era de 691; ahora las pandillas se han vuelto mas agresivas, en el sentido de ganar territorialidad: “las pandillas pueden adquirir armas en la ciudad con mayor facilidad y estas se convierten en instrumentos de poder” (DIARIO HOY, Bogotá, 01/03/2008, s/p).

El comportamiento de los jóvenes está sometido a un control social por parte de ciertos “agentes”, personas que mediante hechos violentos quieren establecer un orden. “La limpieza”, como se les conoce a estas personas, viene asesinando a los jóvenes “por estar a la hora que no deben” (altas horas de la noche) y “con quien no deben” (drogadictos, delincuentes, guerrilla o auxiliadores de la guerrilla). Estos homicidios van más allá del acto en sí, buscan con acciones ejemplarizantes eliminar ciertas conductas asociadas al género. Estar en la calle a horas no permitidas es causa de muerte: en el caso de los hombres, al asociar la noche con la delincuencia y con el consumo de drogas; en el caso de las mujeres con la prostitución principalmente, pero asimismo con el consumo de drogas. La mayoría de homicidios que se atribuye a este grupo son de hombres jóvenes.

Hay distribución masiva de panfletos amenazantes dirigidos a personas “indeseables o sin dolientes”: prostitutas, travestis, ladrones, drogadictos. Los reparten en motos y en carros sin placas y con vidrios polarizados, en zonas deprimidas y de alta conflictividad. La “limpieza social” se visibiliza en panfletos amenazantes dirigidos a las juntas de acción comunal: “Esto es un llamado de atención a las Juntas de Acción Comunal porque los niños buenos se acuestan temprano y los malos se acuestan para siempre”, destaca el informe de la corporación Nuevo Arco Iris (SEMANARIO CAMBIO, 02/07/2009, s/p).

Otra zona muy crítica es el Sur de Bogotá, alrededor del mercado mayorista de Corabastos. La fundación alemana Friederich Ebert Stiftung (FESCOL) ha documentado la presencia paramilitar que

esta mordiendo importantes tajadas en negocios lícitos e ilícitos que van desde la trata de blancas, prostitución, moteles, juegos de azar y contrabando pasando por construcción, almacenes, ventas de carro, gasolineras hasta compañías de vigilancia, entre otros. Si bien la lógica y el sentido mafioso que caracteriza la presencia de los paramilitares en una ciudad como Bogotá van en contravía del logro de una sociedad democrática, también es cierto que alrededor de la organización de las redes de extorsión ha surgido a su vez un nuevo orden social. (...) A pesar de todos los efectos negativos de la organización sistemática de grupos armados que extorsionan a empresarios legales e ilegales, la hegemonía de autodefensas (los paramilitares) y guerrillas en amplios sectores de la sociedad no se explica solamente por su despliegue de terror. Ellos también han sido capaces de montar lucrativas economías de guerra que, mal que bien, son convenientes a las oportunidades de ingresos y de consumo de una multitud de individuos que pocas veces habían podido acceder a la riqueza que ahora está disponible, así sea en proporciones minúsculas (DUNCAN, FLOREZ, 2006, s/p).

Organismos del Estado estarían utilizando menores de edad como informantes mientras por lo menos 14 mil niños son reclutados por grupos armados al margen de la Ley. En Colombia uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años y su ingreso a las filas armadas se inicia desde los 7 años, dice el libro “El delito invisible: Criterios para la investigación del reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia”. Ana María Díaz, experta de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) indicó que el estudio advierte que los menores de 18 años que conforman el 20 y el 30 por ciento de los grupos armados al margen de la ley, son utilizados no solo en tareas militares, sino como ayudantes de cocina y hasta informantes. "Eso lo hacen todos los grupos que participan en el conflicto armado, en cuanto a las fuerzas del estado si se conoce la utilización de los niños y niñas en tareas de inteligencia, para llevar y traer información y de informantes", aseguró a la agencia Caracol (30/09/2009, s/p).

Actores de la acción colectiva

Respecto al actor social movilizador de la acción colectiva, son los jóvenes quienes se llevan el protagonismo dentro de las acciones de resistencia civil frente a la guerra, como evidencia Alzate Zuluaga (2010). Por ejemplo en el artículo citado por la autora “Jóvenes de las organizaciones comunitarias luchan contra los fusiles” se evidencia que (...) “Una caravana por la vida saldrá de cada uno de los barrios en

conflicto de la ciudad. El objetivo: “declararse en resistencia civil contra la guerra en los barrios.” (...). “Estar desarmados es nuestra gran arma para decirle a todos los combatientes que vamos a hacer resistencia cultural, de solidaridad, económica, artística y cooperativa en todos los sectores en donde nos es difícil entrar y vivir” comenta Paola Galeano de la Red Juvenil. El movimiento es liderado por más de 200 jóvenes de 16 organizaciones comunitarias de la ciudad quienes denunciaron que por culpa del conflicto armado la población no puede acceder a muchos programas y proyectos” (El Colombiano, 2002, p. 12^A citado por ZULUAGA, 2010, p. 78).

Entrevisto a Sandra Grisales, representante de la Red Juvenil – Medellín: “la Red Juvenil es una organización juvenil comunitaria y política que trabaja desde inicios de la década de los ’90 en la ciudad de Medellín. Nuestra búsqueda es la transformación de las prácticas culturales que legitiman la cultura militarista, el actual sistema político y el modelo económico. Asumimos la no-violencia activa como nuestra filosofía, articulándonos e integrándonos con iniciativas políticas, populares y sociales alternativas. Desarrollamos desde un enfoque antimilitarista estrategias de resistencia y acción pública para aportar a la desmilitarización de nuestro entorno. La realidad de los jóvenes de los barrios populares de Medellín, refleja que la existencia del conflicto social y armado vigente hoy en la ciudad y de un acentuado estado de militarización y de control policial y privado, continúan siendo obstáculos para la efectividad de los derechos humanos de las juventudes. Como resultado de un modelo que produce desencanto, aparecen propuestas como la de los movimientos antimilitaristas: objetores y objetoras de conciencia, grupos anti-taurinos, el arte como una forma de resistencia que construyen alternativas de vida y resistencia a lo que se les impone como un modo de vivir. La propuesta antimilitarista pasa no solo por la lucha en contra de la estructura militar, la lucha contra la represión, la opresión, el control social, el gasto militar, el intervencionismo falsamente humanitario, el reclutamiento profesional, la lucha contra un modelo económico que agudiza cada vez más las diferencias sociales y somete a una gran población en la miseria. Se trata no solo de acabar con los ejércitos, sino con todo lo que representan históricamente: el patriarcado, las jerarquías, la obediencia y las injusticias. Rechazar las guerras, pero sobre todo, hay un compromiso en la lucha por la eliminación de todas causas que la generan”, concluye Sandra Grisales (entrevista pessoal ao autor, 14/03/2011, s/p).

Otra experiencia particularmente significativa es el proceso del Foro Social Medellín, que articula a nivel inter-generacional diferentes organizaciones sociales

reconociendo un rol protagónico también a los niños, niñas y adolescentes, más allá del paradigma de víctimas de la violencia.

Entrevisto Elkin Pérez, director de Con-Vivamos:

El Foro Social Medellín 2008 se pensó como un espacio incluyente y participativo en el cual pudo confluír toda la población en sus diferentes generaciones con manifestaciones artísticas, culturales y académicas propias de cada grupo social, niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores; a través de actividades territoriales, temáticas y zonales donde cada una de las diferentes poblaciones tuvieron la oportunidad de reflexionar y analizar sobre los ejes planteados en el marco del foro. De ahí que para la población infantil se plantearon actividades en las zonas que estaban inmersas dentro de la perspectiva del foro, las cuales se caracterizaban por contener un componente lúdico, dinámico y visual que le permitiera a los niños y niñas apropiarse de los temas que se trataron, a su vez les brindaba la posibilidad de expresarse frente a la exigencia y reivindicación de sus derechos. Además de la marcha carnaval programada como actividad central dentro de la concepción del Foro Social Medellín, en la cual dicha población tuvo marcada participación, los niños y las niñas se movilizaron por la defensa de sus derechos en la zona nor-occidental y nororiental, contando con la participación de delegaciones de diferentes partes del país como: Bogotá, Cartagena, Cali, Popayán y Medellín. De ésta manera se visibiliza como el movimiento infantil se ha ido fortaleciendo a nivel de ciudad, con acciones descentralizadas y participación activa, donde los niños y las niñas a nivel no solo local, sino municipal y nacional han identificado puntos de encuentro con reivindicaciones y exigencias propias para la satisfacción de sus necesidades. El foro social se ha repetido en 2010 y 2011 (entrevista pessoal ao autor, 16/03/2011, s/p).

Hilda Molano, directora de la Fundación Educación y Desarrollo (FEDES) analiza la propuesta pedagógica en un barrio particularmente difícil de Bogotá, Altos de Cazuca (en el municipio de Soacha), donde entre 2001 y 2004 se habían producido, 250 asesinatos de jóvenes, presuntamente por paramilitares (Informe de Derechos Humanos de niños y niñas, 2004, p. 31):

El proceso de FEDES está orientado en el enfoque pedagógico y su base fundamental es el trabajo desde la narrativa con la búsqueda de la exteriorización y la expresión de los sentires y los problemas y los condicionamientos de los niños y niñas. La narrativa expresada en distintas formas: oral, escrita, visual, el teatro, el cine han sido herramientas de apoyo. Esto es un instrumento pedagógico para adelantar los procesos de formación. El objetivo no es la obra de teatro, no es la publicación, no es el mural, sino el sentido que realmente lleva estos productos y sobre todo el proceso educativo que ellos levanten con nosotros. (...) En 2007 abrimos un nuevo proceso con un grupo en otra zona, Alto de Florida, en Soacha, muy similar a Alto de Cazuca hace 10 años atrás como condición socio-económica. La diferencia con Alto de Cazuca es la presencia sistemática, concreta, operantes de los grupos paramilitares. Los objetivos de los paramilitares sobre niños es que se conviertan en “raspacines”² de hoja de coca. Hoy los están sacando de la zona ya no para incorporarlos a las filas militares de los grupos ilegales sino que hagan trabajo en los Llanos orientales, en Graviare, para la vinculación a ser “raspacines”. Las niñas la utilizan en la prostitución en términos comerciales o en el marco de la guerra y la utilizan también por el tránsito de armas; son las modalidades de la utilización de los niños por parte de los paramilitares en este contexto. También estamos visibilizando el

problema del reclutamiento que tiene un pico más alto el año pasado pero se ha mantenido continuamente. A todo eso se suma el riesgo que tienen los niños de la vinculación a grupos delincuenciales y pandillas que caracteriza Alto de Cazuca y eso genera las jornadas de limpieza social. (...) En eso momento lo más importante que salió como respuesta de protección a la población, fue la decisión que tomó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR de promover la abertura de la oficina de sistema de terreno en Alto de Cazuca: en enero del 2005 llegó ACNUR con la oficina de derechos humanos, y meses después aparece la Casa de los derechos. ACNUR se ha ubicado en un lugar donde a solo media cuadra, al frente habita uno de los jefes paramilitares más reconocidos de la zona. Creemos que después de la llegada del sistema de Naciones Unidas la situación de Cazuca va por un momento de invisibilización.

Considera que entre 2001 y 2003 donde promedio cada semana mataban mínimo 5 jóvenes en la zona. Se construye la cancha de “Julio Rincón” como conmemoración de una masacre de 6 jóvenes ejecutados con un tiro en la cabeza. En 2004 sale la audiencia en el Senado y evidencia que si había una situación sistemática, que el objetivo eran los jóvenes, el mayor número de muertos eran hombres y después de la audiencia, al otro día es el ultimo hecho más claro en este periodo y es la muerte de 4 jóvenes el 20 de agosto del 2004 en el barrio “El Arrojo”, cerca del centro de FEDES donde quedaba nuestra oficina. Llega la oficina de Naciones Unidas. Pasan otros hechos de esta magnitud pero no se le da la misma trascendencia a pesar de que la forma de muerte de los muchachos fue mucho más cruel y a partir de la presencia de la oficina de ACNUR, la situación aparentemente se normaliza. La oficina de ACNUR se ha cerrado porque la situación ha mejorado cuando en el fundo se sabe que la situación no ha mejorado, de hecho en este último periodo la tendencia es que, se antes era desde 13 años por arriba, hoy la tendencia va disminuyendo y hemos tenidos casos que han matado niños de 8-10 años, sobretodo en el marco del conflicto y de la violencia. Otro microcosmos violento es el contexto de Soacha (fronterizo con la periferia sur de Bogotá) que concentra miles de familias “desplazadas” (expulsada forzadamente de su territorio) a nivel urbano de la capital. “Cuando nos vinimos a Villanueva yo tenía 11 años. Nos vinimos para trabajar....Nos vinimos por acá porque la guerrilla llevo y por eso nos escapamos. Tenía miedo que nos reclutaran a la guerrilla. Se han llevado 10 niños entre 10 y 12 años y eran mis compañeros de salón. Aquí es muy diferente porque es frio y allá es caliente”, cuenta Francisco, adolescente que participa en los proyectos educativos de la Fundación Escuela Viajera (MOLANO, 2008).

Experiencias de no-violencia activa

Si bien los niños y niñas que se han desarrollado en este tipo de contextos a través de la aceptación de dispositivos impuestos por la violencia y la pobreza, han creado así mismo, dispositivos que agencian los sujetos en compañía de organizaciones de la sociedad civil como asociaciones, redes comunitarias, movimientos sociales y ONGs, a modo de alternativas para contrarrestar los efectos negativos en la identidad, el acceso y el ejercicio de sus derechos impuestos por el conflicto. Es una propuesta pedagógica fundada en la *resiliencia* como capacidad para enfrentar las dificultades.

Ivonne Oviedo – Coordinadora de la Fundación Escuela Viajera de Bogotá enfatiza que

un ejemplo es la Red Colombiana de Actoria Social Juvenil y de la Infancia, esta surge como una propuesta de articulación y resistencia cultural porque en ella se tejen los sueños y las apuestas de ideales para construir un país donde las oportunidades para los jóvenes y los niños sean reales; es una Red Nacional de iniciativas sociales de jóvenes, adolescentes y niños/as organizados desde abajo que busca incidir en la política pública en cada una de sus localidades (Cauca, Montes de María, Huila, Boyacá y Cundinamarca). La Red está vinculada a la Escuela Latinoamericana de Actoria social Juvenil ELASJ presente con procesos nacionales en 6 países del continente (MORSOLIN, 2011).

La Red se encuentra presente en Soacha a través de la organización comunitaria Escuela Viajera: allí ha realizado el VI campamento de la Red Colombiana de Actoria social en julio de 2012, con la histórica participación de 23 organizaciones sociales de niños/as e jóvenes y 137 participantes. En este evento difundido por UNESCO³, se ha lanzado un manifiesto donde se expresa que “no queremos que los niños, niñas y jóvenes sean utilizados, explotados, ni esclavizados por la guerra. Nos parece muy injusto que niños/as tengan que matar niño/as y que sean reclutados y robados para hacer más guerra. Dispositivos como el uso para la comunicación comunitaria, los bancos de semillas, las huertas comunitarias, los encuentros regionales y nacionales de actoria social, el trueque de productos y de saberes con jóvenes, niños y niñas de los sectores populares urbanos, campesinos e indígenas han permitido emergencias y agenciamientos del concepto de derecho. Así mismo es evidente que persisten elementos de representación que unifican el concepto de derechos de la infancia a partir de dispositivos como la familia, la escuela, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil e incluso de los que lo limitan y vulneran (OVIDEO, entrevista pessoal ao autor, 20/03/2012, s/p)⁴”.

Existen varios ejemplos de iniciativas de la sociedad civil en la búsqueda de una justicia que no siempre la institucionalidad ha podido proporcionar. Uno de los

fundamentos de los tribunales ético-políticos, como el Tribunal de Opinión sobre Cazuca y Ciudad Bolívar, se encuentra en la declaración contenida en el Acta de Constitución del Tribunal Bertrand Russell, establecido en 1966 para juzgar y condenar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Vietnam. Igualmente en el Acta de Constitución del Segundo Tribunal Russell para juzgar los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras en América Latina entre 1974 y 1976, firmada en Bruselas en noviembre de 1973, se reafirmó que la legitimidad y poder de estos tribunales se funda en la voluntad soberana de los pueblos como contrapuesta al poder de los gobiernos⁵.

El fallo dictado el sábado, 25 de noviembre de 2006, por el Tribunal Internacional contra la Impunidad de Bogotá, tras analizar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad de Ciudad Bolívar y, en particular, en el barrio Altos de Cazuca del sur occidente de Bogotá, declaró responsables de estos ilícitos al actual Gobierno colombiano, a la Unión Europea, al Gobierno de los Estados Unidos, a tres multinacionales, a las alcaldías de Bogotá y Soacha y a los organismos de seguridad del Estado:

Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazuca constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales. (...) El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad” evidencia el Veredicto del Tribunal Internacional contra la Impunidad (JUSTICIA Y VIDA, 2006, p. 166).

El día 20 de marzo de 2007 en La Haya ante la Corte Penal Internacional una delegación de parlamentarios y destacados activistas de derechos humanos (entre los cuales Lilia Solano, Directora de la ONG “Justicia y Vida” y Alirio Uribe, Presidente del Colectivo de abogados Restrepo) con el apoyo del Polo Democrático Alternativo y de importantes personalidades europeas (como Francois Houtart, Presidente de Forum des Alternatives), presentaron una denuncia contra el Estado colombiano, subrayando que “ante la sistematicidad con que se cometen estos crímenes y la falta de investigación de las estructuras responsables por la comisión de estos graves delitos, hemos procedido a documentar estas violaciones y decidimos transmitir los elementos recogidos bajo esta forma a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional” (2012, s/p).⁶

Aunque los y las jóvenes manifiestan que los asesinatos han disminuido en los últimos años, con respecto a años anteriores, dicen saber que los grupos armados

continúan presentes en la comunidad, cobrando “vacunas” y extorsiones, amenazando e intimidando, teniendo especialmente a los jóvenes en el punto de mira.

Frente a las solicitudes de la sociedad civil, el Estado colombiano pasó al tablero para rendir un examen de seis puntos ante la Corte Penal Internacional CPI. El marco para la paz con la guerrilla; los crímenes de los que llama “nuevos grupos armados” (bandas criminales); las investigaciones por desplazamiento forzado; la ley de desmovilización de los paramilitares “justicia y paz”; los casos de violencia sexual y los “falsos positivos” ocuparon los cinco días de visita oficial de la misión de la CPI en Colombia, realizada en abril de 2013.

Políticas públicas para los jóvenes

Para el caso de jóvenes se habla de una intervención a través de políticas públicas en tres ejes: un primer eje se concentra en el estado, donde se destaca la justicia y la resocialización, un segundo eje que involucra un cambio cultural en los jóvenes, vecindario y policía; en el que se habla de un nuevo pacto en torno a la seguridad donde los jóvenes son parte del esquema y, un último eje, que muestra al territorio como punto fundamental de la intervención.

Para poder lograr una resocialización efectiva y temprana sobre los jóvenes es importante identificar y acercarse al joven en su primera infracción en aras de aplicar una sanción temprana y preventiva que, según el tipo de infracción, puede ser desde una granja donde los jóvenes se aislen de sus dinámicas cotidianas que potenciaron esta infracción o una cárcel especial para jóvenes que busque resocializar en el sentido en que no sean escuelas criminales y realmente contribuyan en la reorientación de talentos y virtudes.

Tenemos, por lo tanto, que asumir que la resocialización y el sistema penal padecen de muchos desencuentros por la falta de una sanción temprana pero estricta. En este aspecto es fundamental la revisión del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y sus centros donde se purga la sanción impuesta. Frente a esto debe existir un nuevo pacto, donde el joven sea elemento nuclear dentro del marco de una política pública y de ahí la comunidad y la policía sean los protectores de los jóvenes. Se necesita un cambio de paradigma donde el joven se convierte en “cliente” de la policía y la comunidad acepta las nuevas dinámicas de convivencia en las que se

enmarcan los jóvenes, a la par que no puede existir ningún sesgo ideológico en impulsar el respeto en los jóvenes por la autoridad.

El gran reto consiste en poner a competir una burocracia que suele ser lenta, terca y miope con redes criminales que si bien no están conformadas por genios ni individuos más hábiles que los que hay en el Estado, si tienen un diseño y unas disposiciones que les permiten ser más adaptativos y eficientes (JARAMILLO, MORALES, 2010).

Una de las formas de resolver esto es utilizando de una mejor manera los *outsourcing* sociales por la vía de contratación, concurso e incentivos a las organizaciones de base y, en especial a las organizaciones religiosas o las que trabajen con una gran carga simbólica sobre la ética y la espiritualidad, ya que son éstas las que ayudan a perdonarse en las transiciones difíciles de la reinserción, a volver a sentirse merecedor y desde ahí construir un nuevo código de vida.

Estamos ante un proceso natural en Latinoamérica de programas robustos para atender jóvenes infractores y la necesidad de pasar de una intervención por etapas que arranque desde la primera infancia y termine en la vinculación del joven a un proyecto productivo o al mundo laboral, pasando entonces por la atención y supervisión del niño desde su familia y el remplazo oportuno de la mismo, la educación artística, la educación deportiva, la escolaridad y la participación política y comunitaria con una serie de instituciones y, en el caso de la Alcaldía, de institutos descentralizados.

Buenas prácticas de intervención social

Esta perspectiva innovadora con relación al fenómeno de los niños/as y adolescentes en situación de calle y trabajadores, ha sido analizada de reciente por un grupo de 74 expertos a nivel mundial⁷ que he personalmente liderado en el dialogo con Naciones Unidas y que el Senador Cristovam Buarque, Ministro de Educación del primer gobierno Lula - ha difundido en Brasil. Se plantea que la construcción de un cuadro adecuado de referencia sería posible a través de una red de expertos provenientes del mundo universitario, de las agencias ONU y de la sociedad civil, que trabajen juntos. Durante los años 90 este diálogo se llevó adelante a través de un Grupo de trabajo internacional sobre el trabajo de menores (IWGCL). Es necesario ir adelante en esta dirección.

Vernor Muñoz (2011, p.05), Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010), ha respaldado en una carta abierta, considerando

que la situación de los niños y niñas en la calle muestra uno de los impactos más graves del abandono, la exclusión y discriminación en nuestras sociedades. Se hace necesario profundizar en el análisis de las causas y en la búsqueda de soluciones que conduzcan a mejores intervenciones gubernamentales, basadas en políticas públicas culturalmente pertinentes y socialmente efectivas. Para este fin, se requiere que las acciones desplegadas por las agencias y organismos de las Naciones Unidas, amplíen sus márgenes de acción, de modo que se puedan fortalecer la investigación y acción intercultural e intersectorial.

En ocasión del “IV seminario internacional de pedagogía social” (julio 2012) realizado por la Universidad USP de San Paulo, UNICAMP y UNISAL de Campinas (Brasil), Jacyara Silva de Paiva - docente universitaria y educadora del Movimiento Nacional dos Meninos e Meninas da Rua (MNMNR), ha subrayado que la masacre sistemática de los niños/as y adolescentes en situación de calle en Brasil ha abierto un debate nacional gracias a la movilización e incidencia política de miles de niños/as en situación de calle que piden ser ciudadanos activos en el Brasil del Siglo XXI.

El Movimiento Nacional dos Meninos e Meninas da Rua (MNMNR) en Brasil, resultó ser uno de los movimientos sociales más importantes y representativos en torno a la defensa de los derechos de la infancia en las décadas de 1980-1990, cuando, durante la dictadura militar, grupos parapoliciales asesinaban a niños y niñas de la calle, principalmente en las calles de São Paulo y Río de Janeiro. Estos hechos motivaron un intenso movimiento social de denuncia y acción política a favor de la protección y defensa de dichos niños y niñas que reunió a diversos actores sociales como las ONG, organizaciones populares de base y militantes (hombres, mujeres y niños/as) de diferentes instituciones y facciones políticas. Las protestas contra los abusos policiales, las denuncias ante organismos internacionales y la sistemática difusión en los medios de comunicación de todo el mundo de los acontecimientos de violencia que estaban ocurriendo contra los “niños y niñas de la calle”, presionaron al gobierno militar para tomar medidas en el asunto y poner límites a dicha situación.

Esta buena práctica de movilización e incidencia política ha motivado el informe de Naciones Unidas realizado por Paulo Sergio Pinheiro (2006, p. 69):

La comunidad es una fuente de protección y solidaridad para los niños, pero también puede ser un lugar de violencia, incluida la violencia entre compañeros, la relacionadas con las pistolas y otras armas, la violencia de las bandas, la violencia de la policía, la violencia física y sexual, los raptos y la

trata”. En sus conclusiones destaca la importancia de prohibir toda violencia contra los niños/as, dar prioridad a la prevención, promover valores no violentos y la concientización, proporcionar servicios de recuperación y reinserción social, garantizar la participación de los niños/as, crear sistemas de denuncia y servicios accesibles y adecuados para los niños/as.

Estas recomendaciones han sido implementadas también por la Red Internacional de educadores de calle, integrada por 40 plataformas nacionales a nivel mundial. En ocasión del Encuentro Internacional de Trabajo de calle realizado en Ciudad de México en 2007 se evidencia que

el trabajo de calle es una muy buena inversión para los Estados, pues permite aproximarse a un mayor número de población que no se vincula a las instituciones, y especialmente porque el acompañamiento educativo en espacio público articula fácilmente la colaboración de otros actores sociales como la comunidad, la escuela, la familia, las redes sociales en la prevención del fenómeno callejero. (...) Es necesario reconocer a los y las trabajadoras de calle como actores estratégicos para la renovación de programas e instituciones, así como en el diseño de políticas públicas, considerando su proximidad a las poblaciones callejeras y especialmente por los conocimientos adquiridos en su práctica desde el terreno (RED INTERNACIONAL DE EDUCADORES DE CALLE, 2013).⁸

Hay que destacar también las buenas prácticas construida a través del Mapeo Subregional "Implementación de las Recomendaciones del Estudio Mundial sobre la violencia contra los niños y niñas en Latinoamérica"⁹, realizado en 2012 por Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, por el Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC), con el liderazgo de la Ministra de Infancia de Paraguay Liz Torres (2008-2012). He participado personalmente sobre la situación de Colombia: este mapeo es enfático en resumir algunos desafíos pendientes y vacíos, objeto de este mismo artículo:

para lograr una estrategia completa de combate a la violencia contra niños/as y adolescentes falta todavía considerar nuevas políticas de inclusión y de plena ciudadanía para niños/as y adolescentes de los sectores en situación de desplazamiento por la pobreza y por el conflicto, que son utilizados por las mafias y por los grupos al margen de la ley (PAIS, 2012, s/p).

Otra intervención significativa es representada por el trabajo en condiciones dignas, una herramienta para la inclusión de estos jóvenes, utilizando el secuestro de los bienes a los mafiosos como capital social, de acuerdo a la experiencia que ha desarrollado en el intercambio a través de las ciudades de Medellín y Gela (Italia) con el compromiso de la red italiana antimafia Libera y la ONG “Viva la Ciudadanía” de Bogotá. Esta investigación documenta que la historia de Medellín (Colombia) hay que

dividirla entre antes y después de la administración del proyecto Compromiso Ciudadano, que encabezó Sergio Fajardo y que continuó con Alonso Salazar y lo mismo con relación a Gela y el alcalde Rosario Crocetta (hoy Gobernador de Sicilia y Vicepresidente de la primera comisión en contra del crimen organizado y de la corrupción del Parlamento Europeo). Con estos gobiernos ha habido una ruptura importante, a través de un proyecto que ha buscado darle más transparencia a los recursos y dirigir estos recursos un poco más hacia la acción social en una óptica de educación a la legalidad y a la ciudadanía activa” (MORSOLIN, 2012, p. 99).

En esta óptica, el trabajo social tiene que incidir en las causas estructurales de los conflictos, con una mirada conjunta de acción local y de pensamiento global, para transformar la óptica de víctima en paradigma emancipatorio donde se empodera el adolescente y joven como actor ciudadano. Por ejemplo no se puede seguir utilizando la categorización del fenómeno de los niños soldados como “peores formas de trabajo infantil” como considera la Organización Internacional del Trabajo OIT en el convenio n.182; se trata de crímenes de lesa humanidad como planteo en un artículo publicado por el *Observatoire Géopolitique des Criminalités*¹⁰ de Paris.

En esta perspectiva, un reciente dictamen demuestra la centralidad de la justicia transnacional como avance histórico en la lucha en contra de la impunidad. La Corte Penal Internacional CPI de La Haya ha declarado culpable de crímenes de guerra por reclutar niños soldado a Thomas Lubanga, exlíder de la Unión de Patriotas Congoleña, condenado a 14 años de prisión; los jueces de la CPI consideran probado que forzó a menores de 15 años a luchar entre 2002 y 2003 ¹¹.

Conclusiones

Concluyendo, considero que la vivencia de los derechos humanos, requiere de unas condiciones previas como son por ejemplo, la superación de las causas del conflicto, no por la vía armada y de la polarización, sino por el contrario, a través de alternativas que destaquen la vida, las libertades individuales y las condiciones materiales equitativas y justas de toda la población. Ello implica menor inversión y esfuerzos en la guerra y en la represión policial y un compromiso más decidido y firme con un proyecto económico y cultural que rescate lo digno del ser humano.

Hay que incidir en los contextos donde la violencia está cada vez más privatizada mientras que por otro lado la legitimidad política se diluye.

El escenario y la dinámica social, política, económica y cultural de los territorios urbanos, no solo han estado protagonizados por los actores mafiosos, sino también, por las comunidades barriales, los grupos de base de la sociedad civil, los cuales con sus liderazgos y acciones colectivas, realizadas muchas veces de manera invisibilizada, oponen resistencia no-violenta a este dominio y construyen experiencias alternativas y contra-hegemónicas de la mano con Gobiernos Municipales que creen en la transformación desde abajo, promoviendo políticas públicas de inclusión de las periferias, de desmovilización de los actores armados y mafiosos, del fortalecimiento de la democracia que incide en las causas de la exclusión y del conflicto, del reconocimiento de los adolescentes y jóvenes de los sectores populares como sujetos verdaderamente ciudadanos, para enfrentar los Señores de la Guerra.

Recebido em 23 de junho de 2013.
Aprovado em 08 de agosto de 2013.

Referências

ALZATE ZULUAGA, M. L. El discurso hegemónico sobre las acciones colectivas de resistencia civil. Casos comunas 8, 9 y 13 de Medellín. **Estudios Políticos**, n.36, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, p. 67-93, 2010.

SANTOS, Boaventura de S. **El milenio huérfano: ensayos para una nueva cultura política**. Madrid: Ed. Trotta, 2005.

CABRERA, A. 1.319 Pandillas por toda Bogotá. **Diario Hoy**, Bogotá, 01 mar de 2008.

CARACOL ACTUALIDADES. Grupos armados reclutan niños y las fuerzas del Estado los utilizan como informantes. Bogotá, Colombia, 30 set 2009. Disponible em: <http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/grupos-armados-reclutan-ninos-y-las-fuerzas-del-estado-los-utilizan-como-informantes/20090930/nota/887898.aspx> - Acceso: 22.1.2011

COLOMER, M., LLEIDA, D. **Proposta del model marc pisos d'autonomia**. Barcelona: Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), 2009.

CORRALES, D. Seis causas y tres soluciones para la violencia en Medellín. **La silla vacía**, Colombia, 08 de set de 2010. Disponible em: <http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/17832/diego-corrales-jimenez/seis-causas-y-tres-soluciones-para-la-violencia-en-me> - Acceso: 20.01.2012

DUNCAN, G., FLOREZ, E. La presencia de los paramilitares en Bogotá. **Fundação Friederich Ebert Stiftung** (FESCOL), Alcaldía Bogotá, maio 2006.

HERRAN, J. La guerra de pandillas desborda a Medellín, con más de 1.250 muertos desde enero. **El Mundo**, Colômbia, Caderno America, 29 ago 2010. Disponível em: <http://www.elmundo.es/america/2010/08/29/colombia/1283104381.html> Acceso: 20.03.2012

JARAMILLO ESCOBAR, L., JARAMILLO MORALES, J. Los jóvenes en la violencia y sus aspiraciones en la ciudad de Medellín. Ponencia presentada en el foro **Más allá de las pandillas**, Quito, 2010.

JUSTICIA Y VIDA. **Tribunal contra la impunidad Ciudad Bolívar y Cazucá**. Bogotá: Ed. Buena Semilla, 2006.

MALDONADO, J. Violencia avanza contra la niñez. **espectador. com** Bogotá, Colômbia, 18 set 2011. Disponível em: <http://www.espectador.com/impreso/bogota/articulo-300167-violencia-avanza-contra-ninez> - Acceso: 20.01.2012

MOLANO, H. Informe de Derechos Humanos de niños y niñas durante el 2004. **Coalición Colombia**. Bogotá, Colombia, 2004. Disponível em: www.coalico.org

_____. Entrevista. In: MORSOLIN, C. **El trabajo de crecer**. Ediciones Antropos. Bogotá, Colômbia, 2008.

MORSOLIN, C. **El trabajo de crecer**. Bogotá: Ediciones Antropos, 2008.

_____. **La Actoria social juvenil avanza en Latinoamérica**. Quito: Agencia ALAI, 2011.

_____. Políticas públicas para la inclusión de los adolescentes y jóvenes utilizados por las mafias: Paralelismos entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Gela (Italia). **Revista Foro**, n.76, p. 84-100, 2012.

NUEVO ARCO ÍRIS. Alerta Capital. Semanário Cambio, Bogotá, 02 jul de 2009.

NIETO LOPEZ, R. Resistencia civil no armada en Medellín. La voz y la fuga de las comunidades urbanas. **Análisis Político**, n. 67, 2009.

PÉREZ, E. La guerra de pandillas desborda a Medellín, con más de 1.250 muertos desde enero. **El Mundo**, Colômbia, Caderno America, 29 ago 2010. Disponível em: <http://www.elmundo.es/america/2010/08/29/colombia/1283104381.html> Acceso: 20.03.2012

PINHEIRO, P. **Estudio del Secretario General de la ONU sobre Violencia contra los niños**. New York: ONU, 2006.

SANTINO, U. **La mafia interpretata**. Dilemmi, stereotipi, paradigmi. Catanzaro: Ed. Rubettino, 1995.

Notas

1 “Una guerra es un conflicto armado mayor como reacción a una incompatibilidad que afecta a un gobierno y/o un territorio, donde se da un uso de la fuerza armada entre las dos partes, siendo al menos una de ellas gubernamental y que genera como mínimo 1.000 bajas como consecuencia del enfrentamiento en un periodo de un año”.

2. Recolectores de hoja de coca.

3. Disponible em:

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=16004&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – Acceso: 28.10.2012

4 Disponible em: <http://escuelaviajeraencolombia.blogspot.com/>- Acceso: 20.10.2012

5 Cf documento disponible em: <http://www.internazionaleleliobasso.it/>- Acceso: 20.06.2012

6 Cf documento disponible em <http://www.arlac.be/2007/JairoEspinisa.htm> - Acceso: 21.05.2012

7 El Prof. Jaap E. Doek - Presidente del Comité de Naciones Unidas sobre derechos de los niños/as (2001-2007), Nigel Cantwell-Fundador de Defensa Internacional del Niño DNI, Manfred Liebel, coordinador de la Red Europea de Maestrías ENMCR, Ma. Dolores Muñozcano Skidmore, coordinadora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM - Ciudad de México, Rita Panicker, Directora de la ONG Butterflies-India, entre otros.

8 <http://travailderue.org/es/> - Acceso: 23.03.2013

9 Disponible em: http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/document/_760- Acceso: 20.06.2013

10 Disponible em: <http://geopolcrim.info/?p=588> – Acceso: 29.06.2012

11 Cf documento disponible em:

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/14/actualidad/1331712969_153085.html- Acceso: 20.06.2012